



UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL

**LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA**

Análisis de las acciones judiciales para la indemnización de los perjuicios a la víctima

Estudiante
JHON ALEXANDER VILLALOBOS SUSANA

TESIS METODOLÓGICO Y TEMÁTICO
Dr. José López Oliva

Bogotá, septiembre 2021

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA

Análisis de las acciones judiciales para la indemnización de los perjuicios a la víctima

Jhon Alexander Villalobos Susa¹

RESUMEN

La presente investigación pretende analizar la acción judicial, que permite determinar la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico causado a la víctima con ocasión de la ejecución de una obra civil de vías en Colombia. Lo anterior, se apoya desde un enfoque cualitativo y el método hermenéutico crítico, específicamente, en la interpretación que busca examinar y diagnosticar las contingencias presentadas con relación al daño ocasionado por los entes estatales, y, de este modo, establecer el proceso judicial pertinente que sea aplicable con el fin de dirimir las controversias originadas del perjuicio en mención y obtener el reconocimiento indemnizatorio.

Lo anterior, desde la perspectiva de estudio de los conceptos en mención, se buscará definir los deberes y obligaciones en cabeza del Estado con el fin de prever los posibles riesgos y, en caso de concurrir en los hechos generados del daño producido por los entes estatales, tendrá el compromiso de reparar a las víctimas. Sin embargo, para que se compensen a dichas víctimas, el juez competente decidirá de manera imparcial la indemnización a proporcionar a estos últimos.

INTRODUCCIÓN

Se pretende analizar la acción judicial que permite determinar la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico causado a la víctima en la ejecución de una obra civil de vías en Colombia. Con el objeto de garantizar los derechos vulnerados a las personas con ocasión de los accidentes, perjuicios y afectaciones suscitados de dichos proyectos.

Lo anterior, Ilustrado en el sistema metodológico orientado a la conexión entre el perjuicio ocasionado, el riesgo excepcional y la compensación a la víctima.

¹ Abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, con diplomado en Derecho Administrativo y Laboral. Candidato a adquirir el grado en la Especialización en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia.

Así las cosas, a efectos de proceder con el análisis del presente escrito, a continuación, se expone los temas a desarrollar con el fin de especificar el proceso judicial aplicable a la responsabilidad por parte del Estado frente al daño ocasionado a las víctimas:

En primer lugar, se identificarán los derechos de las víctimas con ocasión de la ejecución de una obra civil, como segundo aspecto, se indicarán los antecedentes respecto de la responsabilidad a cargo del Estado, acto seguido, se expondrán los títulos de imputación acoplados al objeto del presente trabajo, entre los cuales se explicarán la falla del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional, en cuarto lugar, se sustentará el régimen objetivo de responsabilidad en defensa de los derechos de las víctimas. Finalmente, se definirá el medio de control esencial que busca dirimir el problema de la investigación, es decir, la reparación a la víctima y el reconocimiento indemnizatorio.

CAPÍTULO 1

1. LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA CIVIL.

Los derechos de las víctimas con relación a la ejecución de obras civiles soportan su fundamento en la vulneración de estos, frente a las garantías patrimoniales del Estado. Sin embargo, los perjuicios padecidos por los damnificados se sujetan directamente a los derechos personalísimos.² (Murillo, 2017).

Como se indicó en la referencia dentro del párrafo anterior, los derechos personalísimos son vitales en la reparación a la víctima. Toda vez que, con la afectación de estos, se debe establecer un precedente que constituya la restauración de los mismos, como lo son: Derecho a la vida (Art. 11 C. P.), Integridad Física (Art. 44 C. P.), la Libertad (Art. 13 C. P.).³ (Constitución, 1991).

Por lo anterior, a causa de la acción u omisión del Estado, se sintetiza el incumplimiento de las obligaciones de la Administración⁴ (Corte Constitucional, 2011), afectando inminentemente los derechos previamente referidos. Así las cosas, es relevante indicar que los derechos versan en

² De acuerdo con el texto de (Murillo, 2007), se realiza un análisis concreto frente a los derechos de la personalidad y su protección legal, como lo son: derecho a la vida, la integridad física, la libertad, el honor, entre otros...

³ Define y establece cada uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política (1991).

⁴ En la sentencia C-644 de 2011, define y determina el incumplimiento de la administración con relación a las obligaciones frente a los derechos personalísimos.

correlación a la reclamación mediante la reparación directa y de este modo lograr la indemnización que corresponda.

Es notable, identificar la acción originaria que permite exigir la reparación e indemnización a la víctima, motivo por la cual, se definirá específicamente la Reparación Directa. Cuyo título es esencial para el desarrollo de la presente investigación.

1.1. Antecedentes de la responsabilidad del Estado.

El Estado, no solamente demarca una responsabilidad facultativa frente al riesgo con ocasión de los accidentes en proyectos de infraestructura en Colombia. Por tratarse de actividades y/o labores de alto riesgo frente a trabajadores y/o terceros, se debe determinar y asumir compromisos y obligaciones cuantitativas. Sin embargo, se debe resaltar que debido a las pérdidas que generalmente se ocasionan en los respectivos proyectos, esto se aseguran mediante los respectivos contratos de seguros.⁵ (Tamayo, 2013).

Así las cosas, el Estado propende significativamente con relación a los accidentes causados que estuvieren a su cargo o en competencia de un contratista desde un régimen indemnizatorio⁶ (Consejo de Estado, 2016). Por ende, no es justificable eludir las consecuencias derivadas de los accidentes a terceros por culpa exclusiva del Estado, sea por acción o por omisión de este último⁷. (Consejo de Estado, 2014).

Sin embargo, es importante precisar que, dentro de la reparación directa a la víctima, convergen un margen representativo de accidentes por yerro del Estado respecto de los proyectos de Infraestructura. Estos pueden ser, por ejemplo: taludes, afectación a predios, daños en las vías, entre otros. Los cuales ocasionan múltiples circunstancias y cuya responsabilidad recae directamente en el Estado y sus agentes.

⁵ Señala específicamente que debido a las obras pueden ocurrir numerosos eventos que suponen la pérdida económica para las entidades que se destacan en esta vía, motivo por la cual, debido a los riesgos que generalmente se asumen se deben asegurar mediante el contrato de seguros.

⁶ En sentencia del año 2016, resalta que, la acción directa es de carácter netamente reparador y es el medio para juzgar la responsabilidad estatal, así como la indemnización proviene de la conducta activa u omisiva de la administración.

⁷ Referente a la presente sentencia, indica que, la responsabilidad de las entidades públicas de los daños causados incluso en los contratos de concesión, y de este modo abarca los llamamientos en garantías. Además, el estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, como complemento a las reparaciones, indemnizaciones y responsabilidades por parte del Estado, se suma la vulneración a los derechos fundamentales⁸ (K. Ocampo, D. Ospina, F. Suarez, 2018). Aquellas violaciones que van en contravía de la Constitución Nacional⁹ (Constitución, 1991). Se debe precisar y enfocar la seguridad vial como derecho fundamental social.

Aunado a lo anterior, las entidades públicas (Estado) y sus agentes, son los entes directamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a las personas que transitan dentro del territorio nacional.

Cuando se hace referencia a los “agentes”¹⁰ (B. Ceballos, A. García, G. Poveda, 2012) del Estado, es importante resaltar que, aun cuando la responsabilidad se encuentra en cabeza del Estado. Aparecen unas entidades de naturaleza jurídica privada, pero con funciones públicas, que son del mismo modo encargados de responder frente a aquellas víctimas perjudicadas en accidentes con ocasión de proyectos de infraestructura.

1.2.Los títulos de imputación.

Como se establecerá más adelante de forma concreta y específica, con el fin de determinar los títulos de imputación, es necesario abarcar los conceptos de la falla del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional. Sin embargo, es importante señalar que la concepción del término se sujeta a la responsabilidad del Estado. En la Reparación Directa como mecanismo de reclamación frente a la reparación del daño es determinante que se sea imputable al Estado.¹¹ (Ruíz, 2013).

Por lo anterior, exige una imputación fáctica, la cual determina el nexo causal entre el daño por acción u omisión y el daño que se demanda como antijurídico y. La imputación jurídica, que nace con la presencia de títulos de imputación¹² (Hernández, 2010, pág. 259), es decir, los que se advierten a continuación.

⁸ Expone la teoría de los derechos sociales fundamentales.

⁹ Derechos vulnerados ya sea por el Estado o sus agentes.

¹⁰ Define el tema de la culpa referente a los agentes el cual rompe el nexo de causalidad con el estado.

¹¹ Es un vídeo que estudia los “títulos de imputación de responsabilidad del estado”.

¹² Sugiere los dos conceptos que se deben tener en cuenta frente a los títulos de imputación, esto es, la imputación fáctica y la imputación jurídica.

1.2.1. Falla del servicio.

Si bien es cierto que la falla del servicio es relevante con el fin de obtener la indemnización con ocasión del daño causado a la víctima. Es importante resaltar que, el inciso 2 del artículo 2¹³ de la Constitución Nacional advierte la obligación de proteger absolutamente a todas las personas del territorio nacional. Motivo por la cual, la imputación en referencia se subdivide en dos (02) causas fundamentales que confrontan la necesidad de proteger al individuo e indemnizar al mismo por el daño ocasionado¹⁴. (Consejo de Estado, 1998).

Aún cuando la falla del servicio se exterioriza de manera tardía, es decir, con la reparación a la víctima, esta se atañe a la responsabilidad estatal. Las irregularidades originadas por parte del Estado menoscaban la integridad moral, psicológica y adicionalmente el daño físico a la persona.¹⁵ (Luna, 2000).

Con relación a las obras de infraestructura, el Estado y sus agentes deben atender las necesidades de la comunidad mediante la protección y defensa de sus derechos fundamentales, especialmente el Derecho a la vida. Por lo tanto, la responsabilidad y obligación del Estado versa frente a los cuidados tangibles que deben tener las obras sin repercusión a los accidentes ocasionados por las anomalías presentadas a futuro.¹⁶ (Güeña, 2011).

Se almacena y conserva una gran variedad de jurisprudencia¹⁷ (Tribunal Administrativo, 2009) vinculados directamente con las reparaciones directas suscitadas de los hechos ocasionados en proyectos de infraestructura. Las cuales juegan un papel esencial en las solicitudes elevadas ante las altas Cortes. Toda vez que, de estas dependen los fallos a endilgar en los procesos que se lleven a cabo.

Las decisiones impartidas frente a las indemnizaciones de las víctimas nacen de las pérdidas que son puestas a calificación por los distintos entes a efectos de emitir un dictamen coherente y, de este modo disponer la decisión más aproximada a compensar los daños y/o perjuicios causados.¹⁸ (Consejo de Estado, 1990).

¹³ Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades

¹⁴ Especifica la falla del servicio mediante la acción de la reparación directa.

¹⁵ Estado de la infraestructura en la mira.

¹⁶ Enfatiza su investigación en la falla del servicio como medio de afectación a los derechos fundamentales.

¹⁷ Argumento sobre la responsabilidad extracontractual por fallas del servicio.

¹⁸ Las fallas de servicio con relación al tránsito.

Es necesario indicar que, la mayoría de los eventos producidos se deben a las irregularidades de las vías con ocasión de las construcciones y manejo de las mismas por parte del Estado. Por tanto, la responsabilidad es concluyente para ser gestionada y reclamada mediante el medio de control correspondiente con el fin de que la víctima sea reparada en su totalidad. En atención a las fallas generadas en las vías donde participe el Estado, no es posible que intervenga con el propósito de perjudicar a la sociedad¹⁹. (L. Villamizar, M. Hernández, 2012).

Ondeando el tema en mención, la falla del servicio no se debe solamente al mal estado de las vías intervenidas por los entes estatales. Otro de los asuntos cuestionados es el desconocimiento por parte de los constructores contratados, ya que, en la etapa de construcción, se requieren de los mecanismos de señalización pertinentes que permitan la visualización notable que es indispensable en el tránsito de ciudadanos en los puntos de cimentación.²⁰ (Ámbito Jurídico, 2018).

Sin contar las cuantiosas circunstancias por las cuales se generan los accidentes viales. Sea por la acción, omisión e incumplimiento del Estado en los diferentes proyectos de Infraestructura. Que si en la oportunidad, las empresas fueran meticulosas con todos y cada uno de los aspectos constructivos y los que se desprenden de este, evitarían en un porcentaje muy elevado al actual, los accidentes en dichos proyectos.²¹ (Jaramillo, 2003).

Como razonamiento final, resalto en el presente trabajo la responsabilidad tanto para el Estado en un primer plano, como para las entidades o agentes que interceden en el proceso de construcción. Sin determinar la carga de culpabilidad a espaldas del Estado o de las entidades que mediante las licitaciones otorgadas fueron las encargadas de proyectar el proceso final de cada proyecto de Infraestructura.²² (Vallejo, 2007).

1.2.2. El daño especial.

La secuela del presente título de imputación deriva su definición específica en el perjuicio y resultado de este mediante la indemnización. Aunque este se deriva de la falla del servicio ocasionado en los proyectos de infraestructura objeto de la discusión en el análisis del presente

¹⁹ Se identifica en su estructura la reparación directa.

²⁰ Artículo en la cual realiza una breve explicación frente a la reclamación no solamente por los accidentes con ocasión de las fallas en las vías, sino también de la mala señalización en los proyectos de infraestructura.

²¹ Estudio frente a eficiencia y deficiencia de la infraestructura, especialmente vial en Colombia.

²² Un breve recuento con relación a la responsabilidad en las etapas de la construcción en obras de infraestructura y otras.

escrito, es necesario abarcar el título en mención a efectos de avocar en un mayor aspecto la relevancia de este.²³ (S. Araque, M. Castillo, 2013).

Es menester que, el daño especial se estructura por la intervención directa del Estado y el aspecto a seguir, la carga que pudiere soportar el individuo con ocasión de los accidentes en los proyectos viales. Respecto de la responsabilidad directa del Estado, como se ha citado anteriormente, las entidades estatales comprenden en su mayor parte la obligación de responder por los accidentes en los cuales se ven involucrados la ciudadanía²⁴. (Benítez, 2020).

Aún cuando el Estado generalmente traslada la responsabilidad a sus subordinados. Sin embargo, es un hecho claro que la responsabilidad recae en un primer momento en el Estado, es por ello por lo que se activa el primer punto para dar alcance al daño especial. Como trascendencia auxiliar para constituir el título referido, encontramos una divergencia en el soporte o carga que pueda aguantar la víctima frente a las irregularidades en los proyectos viales.²⁵ (Consejo de Estado, 2018).

Los accidentes viales se categorizan dentro del riesgo más alto indicado en las escalas establecidas. Los cuales identifican una serie de semblantes característicos como el hecho originador, la responsabilidad, el funcionamiento de la vía, el deterioro de la misma, el deber objetivo de cuidado, entre otros. Pero que tan evidente es la tolerancia por parte del sujeto al incidir en un accidente en proyectos viales y de qué manera se podría compensar, con este segundo aspecto se formaliza el daño especial.²⁶ (Ámbito Jurídico, 2018).

En contraste con lo anterior, el título de imputación refiere a la igualdad de las personas frente a la responsabilidad estatal que aún cuando no se desprenda de la falla del servicio directamente. Es obvio que, al Estado le asiste la obligación de indemnizar a los sujetos que se ven involucrados en accidentes de infraestructura, toda vez que, todos estos proyectos son organizados por las distintas entidades estatales con el fin de generar un compromiso social y económico²⁷. (Compra Eficiente, 2021).

²³ Un enfoque específico al daño especial.

²⁴ Elementos diferenciadores entre el daño especial y el riesgo excepcional.

²⁵ El Daño Especial como afectación de los sujetos involucrados.

²⁶ Artículo que avoca el Daño Especial como aspecto excepcional en los proyectos viales.

²⁷ Artículo respecto de la Acción Pública de Inconstitucionalidad contra el artículo 50 de la Ley 80 de 1993. Disposición jurídica.

La responsabilidad frente al daño antijurídico causado por obligación del Estado se refleja en el artículo 90²⁸ (Constitución Política, 1991) de la Constitución Nacional, el cual revela un claro elemento protector al sujeto que se debe indemnizar. Y determina que existe el daño es imputable a los entes estatales.²⁹ (Tribunal Administrativo, 2012).

Finalmente, el daño especial determina que la responsabilidad del Estado desprende la indemnización del sujeto en los accidentes que se involucre proyectos de infraestructura cuyo alcance obligatorio sea en cabeza del mismo Estado.

1.2.3. El riesgo excepcional.

A diferencia del daño especial, el riesgo excepcional alude a la inexistencia del nexo causal que, a fin de eximirse de la responsabilidad generada, se busca que el hecho generador proceda por la actividad riesgosa. La carga probatoria no siempre favorece a la víctima debido a la culpa exclusiva de la misma.³⁰ (Consejo de Estado, 2011).

A la administración del mismo modo, le corresponde y le resulta arduo demostrar una carga contraria a efectos de evitar la responsabilidad frente a los afectados. Es decir, el Estado tiene la obligación de demostrar que no le asiste obligación alguna. Sin embargo, para demostrar la carencia de dicha responsabilidad, tiene dos opciones, la primera, que el perjuicio se deba a una causa extraña (Fuerza mayor o Caso fortuito), o, como se manifestó en el párrafo anterior, la culpa exclusiva de la víctima³¹. (Consejo de Estado, 2011).

Adicionalmente, como todas las figuras expuestas en el presente texto, existe una afectación directa a los derechos fundamentales. Dentro de los títulos de imputación, su vulneración se centra en el derecho a la igualdad³² (Constitución Política, 1991), toda vez que, con el daño causado a los sujetos se insta un desbalance frente a los demás ciudadanos de la nación. Con el fin de equiparar una igualdad debe realizarse a través de la indemnización correspondiente.

²⁸ Artículo 90.: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades”.

²⁹ Dentro de las consideraciones abarca el Daño Especial como prueba para indemnizar a la víctima.

³⁰ Riesgo excepcional como exoneración de la responsabilidad por parte del Estado.

³¹ Inexistencia de la responsabilidad imputada a la Administración.

³² Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

El régimen objetivo de responsabilidad en cuestión con el riesgo excepcional coexiste de manera tangencial frente a la carga de la prueba como se aludió previamente. Así las cosas, con el fin de valorar el riesgo en estudio, se debe enfocar en dos aspectos: (i) Las actividades peligrosas derivadas de los proyectos de infraestructura vial y; (ii) La relación directa de la víctima sujeta a los accidentes ocasionados en dichos proyectos de infraestructura.³³ (Agencia Defensa Jurídica, 2013).

Aunado a lo anterior, el administrado debe conservar el deber objetivo de cuidado, de manera que, cuando se genere una consecuencia como el que estamos estudiando. No se desvalorice el concepto del riesgo, el daño y la reparación y, por consiguiente, resulte una culpa exclusiva y meramente de la víctima. Es necesario que, la responsabilidad, así como la indemnización recaiga en la Administración, cuando se demuestre que la víctima cumplió en su totalidad con las obligaciones que le corresponden frente al riesgo. Y por ello dicha responsabilidad se desmejora para el Estado.³⁴ (Martínez, 2018).

En conclusión, tres puntos esenciales a efectos de determinar el riesgo excepcional se resumen en lo siguiente: (i) La identificación del régimen de responsabilidad adaptable al caso en particular. (ii) En consonancia con lo anterior, dicho régimen establece un eximente de responsabilidad respecto de un tercero y; (iii). Definir si el acervo probatorio es concreto con el fin de establecer la responsabilidad por parte del Estado hacía la víctima.³⁵ (Consejo de Estado, 2008).

CAPÍTULO II

2. EL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA.

2.1.El derecho a la reparación integral de la víctima.

Los accidentes generados con ocasión de los proyectos de infraestructura no se limitan solamente a las personas, sino también a las afectaciones que puedan tener los bienes muebles e

³³ Lineamientos jurisprudenciales relevantes para el fortalecimiento de la defensa jurídica y la implementación de la conciliación en casos de responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados con vehículos oficiales.

³⁴ Análisis descriptivo del concepto correspondiente al Riesgo Excepcional.

³⁵ Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

inmuebles. Por lo tanto, la indefensión de las víctimas frente a las compensaciones que debe remunerar el Estado, son cada día más complejo de comprender, desde un ámbito de protección que abarque en su totalidad la seguridad y apoyo que la ciudadanía requiere.³⁶ (Corte Constitucional, 2016).

Por ende, existe un debate descomunal sobre la prevalencia de los asuntos que interfieren en la protección de derechos de la sociedad en un sentido amplio. Por lo anterior, las reparaciones integrales de la víctima sugieren temas como la indemnización directa de la persona y la urgencia de cobijar los perjuicios motivados en el instante.

Como consecuencia de lo anteriormente citado, es razonable especificar que el saneamiento de derechos vulnerados no se efectúa en su integridad. El objeto esencial del presente escrito refiere por lo menos la restauración de derechos en una proporción que reintegre a la persona en una condición igualitaria de derechos frente a los que tiene la ciudadanía³⁷. (Sandoval, 2013).

2.2.Las garantías de los derechos de las víctimas.

El presente aparte, obedece a que los perjuicios suscitados por los errores en los proyectos de infraestructura, los cuales ocasionan graves daños a personas por accidentes deben ser reparados en su integridad con el fin de garantizar en su integridad los derechos de las mismas. Y su restauración se ejecuta a través de las indemnizaciones que declaró el juez a efectuar al afectado. Lo anterior, con el fin de reestablecer el derecho vulnerado.

CAPÍTULO III

3. EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA Y LA GARANTÍA DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

3.1.Medio de control (Reparación Directa).

³⁶ Acción de tutela instaurada por José Eliécer Díaz Bohórquez contra el Oleoducto Central Andino –Ocensa- y el Consorcio de Tierras Boyacá.

³⁷ Artículo Reparación integral y responsabilidad civil: *“El concepto de reparación integral y su vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas”*.

Como aspecto primordial, el medio de control habilitado para solicitar y obtener la reparación e indemnización con ocasión de los proyectos de infraestructura se denomina REPARACIÓN DIRECTA³⁸ (C.P.A.C.A., 2011). Figura jurídica encargada de reparar al individuo de los perjuicios y afectaciones causados por la intervención directa del Estado o a través de sus agentes.³⁹ (Manjarrez, 2018).

Sobre la base de lo antes indicado, cualquier persona que se vea afectada, especialmente, con lo estudiado y analizado en el presente documento. Podrá solicitar el saneamiento de sus derechos y la compensación decretada por la vía del medio de control de reparación directa. No obstante, coexisten unas causales, por las cuales se puede dar impulso al proceso en mención, estas son: (i) La acción, (ii) La omisión, (iii) La operación administrativa, (iv) La ocupación temporal o permanente de un inmueble, (v) Un hecho y (vi) Cualquier otra causa imputable a una entidad pública.⁴⁰ (Consejo de Estado, 2018).

Adicionalmente, el medio de control exige que se agote el requisito de procedibilidad que, para el proceso que nos ocupa, se necesita agotar previo al proceso judicial, la conciliación extrajudicial. En otro orden de ideas, con el fin de obtener la reparación e indemnización que corresponde, sin llegar a instancias judiciales. Es posible que las partes acudan voluntariamente a un centro de conciliación, personería, procuraduría, entre otros, a efectos de conciliar y evitar un proceso desgastante para las mismas.⁴¹ (Bernal, 2020). Claro, cuando se evidencia la responsabilidad por parte del Estado. (Vargas, 2015).

Otra de las coyunturas que describe el medio de control, es el término legal del cual se goza para interponer en debida forma la reparación directa, es decir, la caducidad de la acción. Esto es, que a partir de la ocurrencia de los hechos ya sea por acción o por omisión, la persona a la cual se

³⁸ Artículo 140: “En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

³⁹ Estudio comparado sobre el medio de control de reparación directa.

⁴⁰ Indica las causales de impulso procesal de la acción de reparación directa.

⁴¹ Señala que se requiere de la conciliación a efectos de evitar el proceso judicial y la descongestión de procesos instaurados ante la rama judicial.

le produjo el daño antijurídico cuenta con dos (02) años con el fin de promover dicho proceso.⁴² (Consejo de Estado, 2015). Lo precedente con relación a la indemnización de las afectaciones generadas. (Betancur Jaramillo, 2002).

Como se mencionó previamente, la acción de reparación directa procede siempre y cuando el Estado o sus agentes vulneren directa o indirectamente los derechos fundamentales y corporales de las personas. Sin, embargo, en caso de que proceda el medio de control en análisis, el sujeto adquirente de derechos debe dar cumplimiento a los requisitos que exige el medio de control.

3.2.Llamamiento en garantía.

En sintonía con el tema de la referencia, el llamamiento de garantía aparece cuando se involucra a un tercero responsable en la reclamación promovida por el accionante. Por lo tanto, un parámetro esencial en los proyectos de infraestructura corresponde al compromiso y/u obligación de los intervinientes dentro de dichos proyectos, sean contratistas, aseguradoras u otros.⁴³ (W. Ballen, G. Moya, 2016).

Generalmente, dentro del medio de control, se exige la comparecencia de empresas privadas quien son las encargadas de ejecutar los proyectos asignados y, es evidente que tanto los contratantes como los contratistas suscriben un contrato de seguros con el fin de que en caso de resultar responsables por un accidente. Las aseguradoras respondan hasta el límite contratado de los daños y/o perjuicios ocasionados al demandante.⁴⁴ (Consejo de Estado, 2010).

CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD Y EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

⁴² Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo sección Tercera Subsección B – Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth, 15 de octubre de 2015. Radicación: 2003-02207-01: *“El legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho”*.

⁴³ Exposición llamamiento en garantía y requisitos.

⁴⁴ Aspectos conceptuales y jurídicos del llamamiento en garantía.

En consonancia con lo expuesto anteriormente. La propuesta para desarrollar la pregunta de investigación se expone de la siguiente manera:

1. Identificación de los hechos suscitados en los proyectos de infraestructura y establecer la causal por la cual el Estado es responsable por los daños generados.
2. Convocar tanto al Estado como a sus agentes a la conciliación como requisito de procedibilidad.
3. En caso de no llegar a un acuerdo conciliatorio, iniciar el proceso judicial (medio de control reparación directa) a efectos de obtener la indemnización por los daños antijurídicos originados. Es importante aclarar que, no se debe confundir la Reparación Directa con la Responsabilidad Civil Extracontractual.
4. Finalmente, en fallo emitido por el juez competente definirá la reparación y establecerá la indemnización proporcional a los daños ocasionados.

CONCLUSIONES

El argumento final de la presente investigación determina los parámetros por los cuales todos los sujetos dentro del territorio nacional pueden a través del medio de control de la reparación directa, restaurar sus derechos y obtener la indemnización por las circunstancias generadas en los proyectos de infraestructura viales en Colombia. Sin embargo, es necesario reiterar que, en afinidad con la propuesta de trabajo, se deben identificar las causales, tener presente el término de caducidad, cumplir con el requisito de procedibilidad y finalmente iniciar el proceso judicial.

Así las cosas, el procedimiento a seguir para obtener dicha indemnización es el contemplado en el artículo 140 del C.P.A.C.A., el cual define y determina los requisitos de la reparación directa.

REFERENCIAS

María Camila Murillo Santana, 2017. *“La responsabilidad civil: el daño a bienes de especial protección constitucional como una nueva modalidad de daño extrapatrimonial en el ordenamiento jurídico colombiano”*.

Corte Constitucional, sentencia C-644 (2011). Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 140 de la ley 1437 de 2011.

MAPFRE RE (2003), informe técnico sobre *“riesgo y seguro en la construcción de infraestructuras civiles”*.

Consejo de Estado (2016). Consejero Ponente: Dr. Ramiro Pazos Guerrero.

Consejo de Estado (2014), Consejero Ponente: Dr. Ramiro Pazos Guerrero.

Karen Ocampo, Delia Ospina y Félix Suárez (2018), concepto y estructura de la seguridad vial como derecho social fundamental en Colombia.

Bertha Ceballos, Ana García y Guillermo Poveda (2012) *“El hecho del agente en la responsabilidad patrimonial del Estado como causal de inimputabilidad”*.

Elier Eduardo Hernández – Teoría general de los contratos de la administración pública.

Consejo de Estado (1998). Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

Luna, David (2000). Estado de la infraestructura en la mira.

Revista prolegómenos, derechos y valores. Dr. Ciro Nolberto Güecha Medina (2011).

Tribunal Administrativo de Santander (2009. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Gutiérrez Solano.

Consejo de Estado (1990). Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

Lyda Giovana Villamizar Ruiz y Margarita María Toro Hernández (2012), Se identifica en su estructura la reparación directa.

Artículo de ámbito jurídico (2018).

Luis Fernando Jaramillo Correa (2003). El Estado de la infraestructura en Colombia frente al reto de la globalización.

Felipe Vallejo (2007) – La responsabilidad profesional en la construcción de obras.

Silvia Juliana Araque García y María Teresa Castillo Morales (2013). Un enfoque específico al daño especial.

Martha Janeth Benítez A (2020). Elementos diferenciadores entre el daño especial y el riesgo excepcional.

Consejo de Estado (2018).

Artículo de Ámbito Jurídico (2018).

Artículo emitido por Compra Eficiente: Acción Pública de Inconstitucionalidad contra el artículo 50 de la Ley 80 de 1993. Disposición jurídica. Ley 80 de 1993. Artículo 50.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2012). Magistrado Ponente: Dr. José Élvor Muñoz Barrera.

Consejo de Estado (2011). Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

William Alexander Ballen y Gladys Camacho Moya, año 2016. Exposición llamamiento en garantía y requisitos.

Consejo de Estado (2010). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

Vídeo youtube Wilson Ruíz Orjuela (2013), “*títulos de imputación de responsabilidad del Estado*”. <https://www.youtube.com/watch?v=dVPMAn4PF7AvI>

Constitución Política (1991), artículos 11 (Derecho a la vida), 13 (Derecho a la libertad), 44 (Integridad Física), 90 (Responsabilidad del Estado).

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (2011), artículos 140 (Reparación Directa), 225 (Llamamiento en Garantía).

Código General del Proceso (2012).

Ley 2080 (2021). Reforma C.P.A.C.A.

Decreto 806 (2020).